Dictamen de no aprobación y remisión al archivo, recaído en el Proyecto de Ley N° 3031/2022-CR, que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, respecto al registro, control, cancelación migratoria y expulsión de extranjeros.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
13 FEB. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:00 m.

DICTAMEN

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente

Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, de conformidad con el artículo 107 de laConstitución Política del Perú y el artículo 67 del Reglamento del Congreso de la República, el **Proyecto de Ley Nº 3031/2022-CR** presentado por el Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, por iniciativa de los Congresistas Cutipa Ccama Víctor Raúl, Balcázar Zelada José María, Marticorena Mendoza, Jorge Alfonso, Varas Meléndez, Elías Marcial y Cruz Mamani Flavio; que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo N°1350, Decreto Legislativo de Migraciones, respecto al registro, control, cancelación migratoria y expulsión de los extranjeros.

Después del análisis y debate correspondientes, la Comisión acordó por **UNANIMIDAD** de los presentes, en su Décima Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de febrero de 2023, de no aprobación y remisión al archivo del Proyecto de Ley N° 3031/2022-CR; con los votos a favor de los congresistas Diego Bazán Calderón, Tania Ramírez García, Alfredo Azurín Loayza, Carlos Alva Rojas, Roberto Chiabra León, Patricia Chirinos Venegas, José Cueto Aservi, Américo Gonza Castillo, Jeny López Morales, Pedro Martínez Talavera, Segundo Montalvo Cubas, Jorge Montoya Manrique, Vivian Olivos Martínez y Alex Paredes Gonzales; con las licencias/justificaciones de los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu y Abel Reyes Cam.

Asimismo, en la misma sesión se aprobó por unanimidad de los presentes la autorización para la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta; con los votos a favor de los congresistas Diego Bazán Calderón, Tania Ramírez García, Alfredo Azurín Loayza, Carlos Alva Rojas, Roberto Chiabra León, Patricia Chirinos Venegas, José Cueto Aservi, Américo Gonza Castillo, Pedro Martínez Talavera, Segundo Montalvo Cubas y Alex Paredes Gonzales.

I. SITUACIÓN PROCESAL

Firmado digitalmente por: AZURIN LOAYZA Alfredo FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/02/2023 09:37:18-0500

Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/02/2023 11:51:22-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/02/2023 14:34:17-0500

a) Antecedentes

El Proyecto de Ley Nº 3031/2022-CR, fue presentado a la Oficina de Trámite y Digitalización de Documentos el 09 de setiembre de 2022; siendo decretado e ingresando a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como primera comisión dictaminadora, el 14 de setiembre de 2022.

b) Cumplimiento de los requisitos constitucionales y reglamentarios

Luego de la revisión de la iniciativa legislativa se puede determinar que, ésta cumple con los requisitos generales y especiales de las proposiciones de ley, establecidos en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República; por lo que se dispuso se prosiga con el trámite de estudio, pedido de opinión y dictamen según corresponda.

Al contener la exposición de motivos de la iniciativa la sustentación en base a los extranjeros de nacionalidad venezolana, estaría colisionando con el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Perú, referido a la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Asimismo, la expulsión de extranjeros por la presunta comisión de delitos dolosos contraviene el principio constitucional de presunción de inocencia; lo que corresponde es el pronunciamiento del Poder Judicial a través de una sentencia firme; por ello, Migraciones no tendría competencia para determinar la culpabilidad de un extranjero.

c) Opiniones solicitadas

Oficio	Entidad	Fecha
Oficio Nº 264-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Presidencia del Consejo de Ministros	19.09.22
Oficio Nº 265-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Superintendencia Nacional de Migraciones	19.09.22
Oficio Nº 266-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio del Interior	19.09.22
Oficio Nº 267-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Relaciones Exteriores	19.09.22
Oficio Nº 268-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	19.09.22
Oficio Nº 269-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Ministerio Público	19.09.22
Oficio Nº 270-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Poder Judicial	19.09.22
Oficio Nº 271-2021-2022/CDNOIDALCD-CR	Defensoría del Pueblo	19.09.22

d) Opiniones recibidas:

1. **Del Ministerio Público,** se ha recibido el Oficio N° 004752-2022-MP-FN-SEGFIN, suscrito por su secretario general, de fecha 22 de setiembre de 2022, señala que **no le corresponde emitir opinión**.

2. **Del Poder Judicial,** se ha recibido el Oficio Nº 004248-2022-SG-CS-PJ, suscrito el Secretario General, de fecha 28 de setiembre de 2022; acompañado de la documentación siguiente:

   - El Oficio N° 000429-2022-GA-CS-PJ del 28 de setiembre de 2022, de la jefatura de Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema.
   - El Informe N° 000290-2022-GA-P-PJ del 27 de setiembre de 2022, de la jefatura de Gabinete de Asesores, que concluye considerando que no es pertinente emitir opinión

3. **De la Presidencia de Ministros,** se ha recibido el Oficio N° D002538-2022-PCM-SG, suscrito por su secretario general, de fecha 30 de setiembre de 2022; acompañado de la documentación siguiente:
   - El oficio N° D008327-2022-PCM-SC del 26 de setiembre de 2022, de la Secretaría de Coordinación.
   - El Informe N° D001429-2022-PCM-OGAJ, del 28 de setiembre de 2022, de la Dirección de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que concluye considerando que no le corresponde emitir opinión.

4. **De la Defensoría del Pueblo,** se ha recibido el Oficio Nº 723-2022/DP-PAD, suscrito por la Primera Adjunta, de fecha 27 de octubre de 2022; acompañado de la documentación siguiente:

   - El Informe Jurídico Especializado Nº 031 -2022-DP/ADHPD, del 13 de octubre de 2022, de la adjuntía para los derechos Humanos y las Personas con Discapacidad; que concluye considerando que:

     - La iniciativa no resulta viable ya que contiene consideración que ya se encuentran reguladas en el marco normativo actual.
     - Precisa que, se contrapone a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico vigente; e incumple las obligaciones internacionales en materia de protección de personas en movilidad internacional. Toda vez que, la exposición de motivos del presente proyecto de ley se ampara principalmente en la errónea asociación entre el incremento de actos delictivos y la presencia de refugiados y migrantes en el país.

- Considera importante reafirmar que, la inseguridad ciudadana se trata de un problema estructural, para el cual las autoridades aún no han logrado implementar medidas efectivas por varias décadas. Las autoridades, en tal sentido, no deben amparar sus medidas en la reproducción de estereotipos negativos que asocian la migración con la criminalidad, incentivando escenarios de violencia o xenofobia, desconociendo la falta de visión que ha tenido el propio Estado para dar una respuesta real a la eliminación de la delincuencia en el país incluso antes de la presencia de población extranjera. Por el contrario, se debe realizar un examen adecuado de la compatibilidad entre las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado peruano y la implementación de las medidas que se pretende incorporar.
- Refiere que, del análisis de la propuesta de modificación a los artículos 24 inc. g y 32 inc. g del DL 1350, en el desarrollo de la opinión legal se ha demostrado que la obligación de las personas extranjeras de acreditar y actualizar su domicilio; así como las sanciones ante el incumplimiento de dicha obligación, ya se encuentra debidamente regulada en la normativa migratoria. La inclusión del término de seguridad ciudadana, en el artículo 45º.4 del DL 1350, que regula el control migratorio resulta innecesario ya que guarda relación con el concepto de "orden interno" que ya se encuentra contemplado dentro del mismo articulado.
- Precisa que, de acuerdo al análisis realizado, las nuevas causales de expulsión que se busca incorporar al artículo 58° del D.L. 1350, se debe considerar que ya se encuentran previstas en la norma, en tanto se pueden considerar subsumidas en supuestos generales de salida obligatoria o de expulsión; o la aplicación de la sanción de expulsión no resulta proporcional a la conducta propuesta.
- Indica que, aunado a ello, existe una posible afectación al principio *non bis in ídem* por parte de algunos de los supuestos que se buscan implementar: Artículo 58º del DL 1350: i) Por contravenir disposiciones sanitarias; ii) Por poseer falsos documentos de identidad o suplantación de identidad; iii) Por encontrarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización y iv) Por haber sido detenido por la Policía Nacional del Perú en delito flagrante
- Considera que, el proyecto de ley no cumple con justificar de forma plena la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las modificaciones propuestas para contribuir a "garantizar el orden interno y el bienestar social". Por el contrario, como se ha mencionado reiteradamente, los argumentos desarrollados para

realizar dicho examen se amparan en estereotipos negativos sobre las personas extranjeras.

- Frente a lo expuesto, indica que se archive la propuesta legislativa, y se promueva un análisis crítico que reevalúe el enfoque utilizado en la formulación de este tipo de propuestas, a fin de que no se sustenten en prejuicios con base en la nacionalidad u origen de las personas, atentando contra el principio de igualdad y no discriminación.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

En la exposición de motivos en la parte pertinente a la problemática a resolver precisa que, en nuestro país, la inseguridad ciudadana representa uno de los principales problemas desde hace muchos años, ya que, según las cifras del INEI, alrededor de 9 de cada 10 peruanos que vive en Lima Metropolitana se siente inseguro; igual sucede, pero en menor porcentaje en los departamentos y provincias del Perú. Bajo dicho contexto, en los últimos años, el Perú se ha consolidado como el destino final de un gran número de venezolanos, quienes hoy representan el 2,69% del total de ciudadanos que viven en nuestro país.

Afirma que, las encuestas realizadas por el Instituto de Opinión Pública (IOP) y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP revelan que existe una percepción negativa sobre la migración venezolana, la cual se ha visto asociada con mayores niveles de criminalidad, violencia o delincuencia. Esto debido a que, la criminalización de los migrantes venezolanos es un fenómeno consistente en la construcción social de la imagen de las personas de dicha nacionalidad como una amenaza para la sociedad. Y de acuerdo con el "Estudio de opinión sobre la población extranjera en el Perú", elaborado por la Universidad Pacifico en marzo del 2021, respecto a la migración de la población venezolana, indica que la percepción del 85% de las personas encuestadas es que esta habría generado un incremento de los hechos delictivos y consecuentemente un aumento de la inseguridad ciudadana.

Resalta que, ante ello, un nuevo fenómeno está ocurriendo en nuestro país ya que migrantes venezolanos, con llamativa recurrencia, aparecen como protagonistas de informaciones publicadas en las secciones de sucesos de portales informativos y medios de comunicación, vinculados a hechos de violencia en calidad de victimarios, en vista que han aparecido peligrosas bandas conformadas por delincuentes venezolanos, con las más diversas

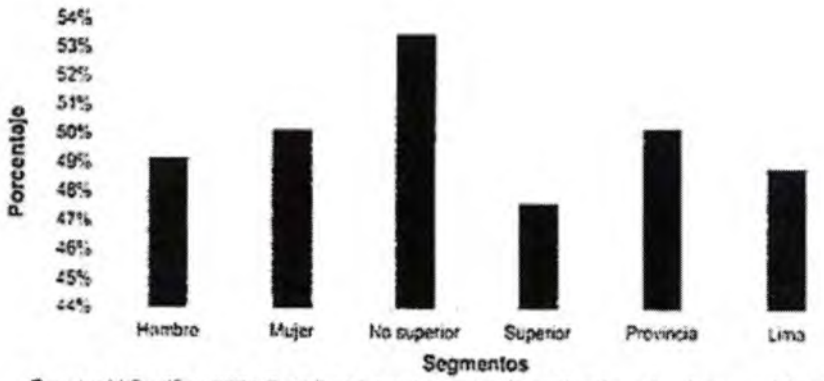
consecuencias. Es así que, en nuestro país, desde hace tres años, son recurrentes las denuncias que narran que células o subgrupos de la banda conocida como "El tren de Aragua", está actuando con regularidad en el Perú. Esto significa que, producto de la debacle del régimen de Chávez y Maduro, en Venezuela, está exportando delincuentes de distintas especialidades, bandas experimentadas y organizadas, métodos delictivos y prácticas criminales de extrema peligrosidad, advirtiéndose los episodios de sicariato, atracos y robos a residencias, ajustes de cuentas entre bandas que se disputan las calles para el trapicheo de las drogas y el control de la prostitución, así como los secuestros, violaciones y a mafias dedicadas al tráfico de personas y la explotación sexual, que no paran de crecer.

Por todo ello señala que, la inseguridad ciudadana constituye uno de los problemas principales de los peruanos y por ende es uno de los temas prioritarios no sólo del actual Gobierno, sino también en muchos de los países de la región y, en consecuencia, la inmediata solución de este problema es uno de los objetivos que nos hemos planteado. Si bien en el Perú se han dado pasos importantes en materia de seguridad ciudadana a partir de septiembre del 2002, cuando por primera vez el Acuerdo Nacional, en forma seria y responsable, analizó la seguridad ciudadana en nuestro país, teniéndose como resultado la dación de la sétima política de Estado que precisa como necesidad prioritaria la erradicación de la violencia y el fortalecimiento el civismo y la seguridad ciudadana con participación activa de la ciudadanía. Como resultado, se promulga en el año 2003 la Ley N° 27933, Ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual tiene como su máximo organismo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y está integrado por 1858 instancias descentralizadas a nivel nacional, que son denominadas Comités de Seguridad Ciudadana Regional (26), Provincial (194), y Distrital (1,638). Es en razón a estos argumentos que, las políticas públicas del ejecutivo sobre la inmigración como un factor que aumenta el crimen debe ser regulada y fortalecida a través del presente proyecto de ley.

En lo que respecto al análisis del estado señala que, la actual coyuntura política y económica, así como la violación de derechos humanos que se vive en Venezuela, ha provocado un éxodo de los ciudadanos a partir de la segunda mitad de la década del 2010, siendo el Perú uno de los destinos escogidos para la migración. Los venezolanos que radican en el país ingresaron en condición de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, términos que, aunque tengan un sentido similar, tienen una connotación

distinta. Por ello, el Estado impulsó medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos durante el proceso migratorio.

Resalta que, la situación en Venezuela seguía empeorando, al punto que cada año el número de migrantes fue creciendo, y los estados que una vez fueron garantes y protectores, ahora les exigen cada vez más requisitos para el ingreso y la permanencia dentro del país. En el Perú, se pasó de un permiso sencillo y accesible a un requisito que, a pesar de la denominación que se le dio ("visa humanitaria"), no tiene nada de ello. Y, en el caso de la Visa Humanitaria, de acuerdo a la Ley de Migraciones (art. 29.2, apartado k), está dirigida: al extranjero que, estando en Perú y sin reunir los requisitos para acceder a la condición de asilado o refugiado, se encuentre en situación de gran vulnerabilidad o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano; o para quien requiera protección en atención a una grave amenaza o acto de violación o afectación de sus derechos fundamentales. Por ello, se otorga a las personas que se encuentren en Perú en las siguientes condiciones: Solicitante de refugio o asilo, quienes hayan migrado por motivos de desastres naturales y medioambientales; víctimas de trata o tráfico de personas, niñas, niños y adolescentes que no se encuentren acompañados; apátridas; individuos que están fuera del territorio peruano en situaciones excepcionales de crisis humanitaria reconocidas internacionalmente, que soliciten venir al Perú y obtener protección. Asimismo, permite al portador realizar actividades lucrativas de manera subordinada, autónoma o por cuenta propia. Tiene un plazo de permanencia de ciento ochenta y tres (183) días, pudiendo prorrogarse mientras persistan las condiciones de vulnerabilidad por las cuales se otorgó la calidad migratoria.



Fuente: U Pacífico 2021 Estudio de opinión sobre la población extranjera en el Perú

Precisa que, la percepción de inseguridad está siendo asociada al fenómeno migratorio y la llegada de población venezolana, además que no existe una política criminal que permita una reacción organizada del Estado y la sociedad civil frente a las acciones delictuosas que se presentan, y consideramos que la razón de la ausencia de medidas de protección eficaz, es la consecuencia de la crisis política que se vive en nuestro país. Si bien está vigente el Nuevo Código Procesal Penal que es una norma garantista y que no es mala, por cuanto lo que falla es la coordinación entre la policía y la fiscalía quienes en un primer momento trabajan para armar un caso y llevarlo ante un juez, pero si el trabajo no se realiza de forma adecuada surgen elementos que van a evitar que quienes delinquen sean procesados siendo urgente la capacitación a los efectivos de la PNP, darles conocimiento y herramientas para desempeñar su función, también deben ser formados y fortalecer su ética para que estén un paso adelante del crimen organizado, detallando cuadros de incidencias.

Refiere que cómo parte de las medidas tomadas respecto al aumento de la migración venezolana en condición irregular, durante el 2019 se indicó que se continuaría con la deportación de venezolanos que hallan mentido a las autoridades sobre sus antecedentes penales y se optó por el control migratorio a través de la militarización fronteriza.

Afirma que, de acuerdo a lo indicado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, a dos años de la COVID-19, se han emitido 6,000 resoluciones de expulsión de ciudadanos extranjeros, de los cuales el 98% corresponden a los de nacionalidad venezolana. Las expulsiones están relacionadas con: presentación de documentación falsa, mentir sobre sus antecedentes penales y judiciales, delincuentes que ya cumplieron su condena, y deben ser expulsados: grupo de ciudadanos que ha decidido irse voluntariamente. Así mismo indicó que sus competencias consideran las irregularidades administrativas o civiles, correspondiendo al Poder Judicial y Ministerio Publico, los delitos que hayan cometido los extranjeros.

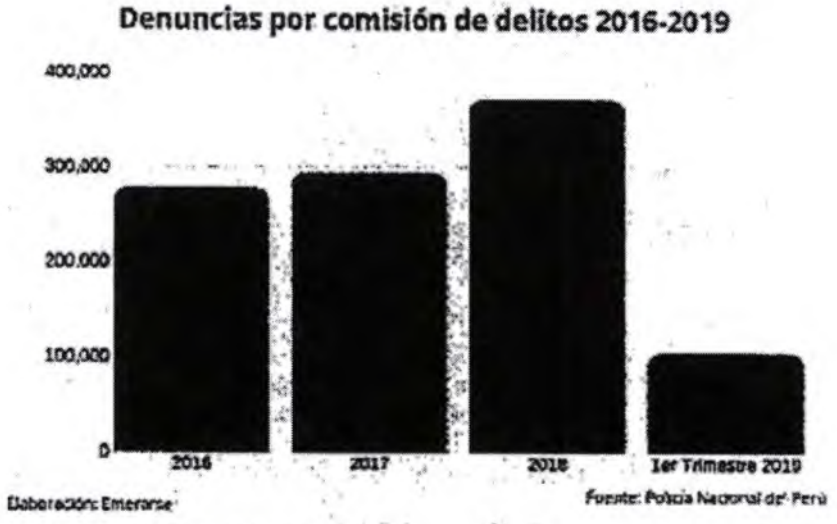
Resalta que, la migración que se produce a nivel mundial ha traído como consecuencia que un gran número de personas extranjeras de diversas nacionalidades tengan la intención de quedarse en el país de manera irregular, la cual se da porque el plazo de permanencia o residencia otorgado por migraciones se encuentra vencido, o ingreso al país sin el registro correspondiente, generando que no se tenga una identificación plena, lo que

afectaría no solo los derechos de aquellos migrantes en esta condición, sino el control adecuado que como Estado soberano nuestro país debe ejercer.

Describe que, se emitió el Decreto Supremo N° 010-2020-IN (jueves 22 de octubre de 2020), que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras para facilitar y agilizar la regularización de la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentren en situación migratoria irregular en el territorio nacional, a la fecha de publicación de la presente norma

Afirma que, acuerdo con Migraciones a septiembre 2021 hay un total de 923,647 venezolanos en situación Migratoria irregular, dentro de los cuales se encuentran comprendidos los que ingresaron de manera irregular, lo que registraron su ingreso y no tramitaron ningún documento migratorio, los que cuentan con permiso temporal de permanencia (PTP) vencido y a los que tienen la residencia peruana (Carnet de extranjería) pero no la han renovado año tras año como establece la ley.

En cuanto los 382.817 (28%) restantes asevera que, el número total de denuncias por comisión de delitos cometidos, ha crecido en los últimos tres años, según el registro de la Policia Nacional del Perú (PNP), se ha pasado de tener 277,673 denuncias en el 2016 a 371,760 en el 2018. Durante el primer trimestre del 2019 se registraron un total de 104,650 denuncias por comisión de delitos. En total, del 2016 al primer trimestre del 2019, ha habido 1, 046, 438 denuncias, de las cuales se presentaron 5,767 denuncias contra ciudadanos venezolanos.

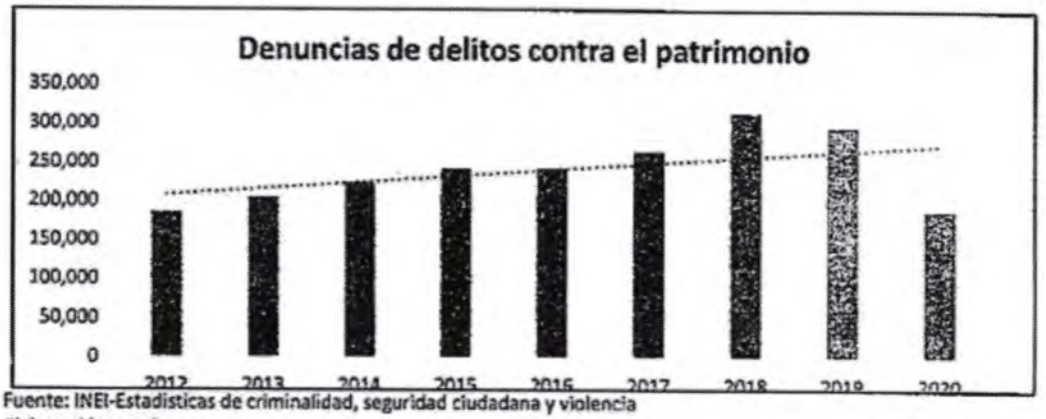


Fuente: Policía Nacional del Perú

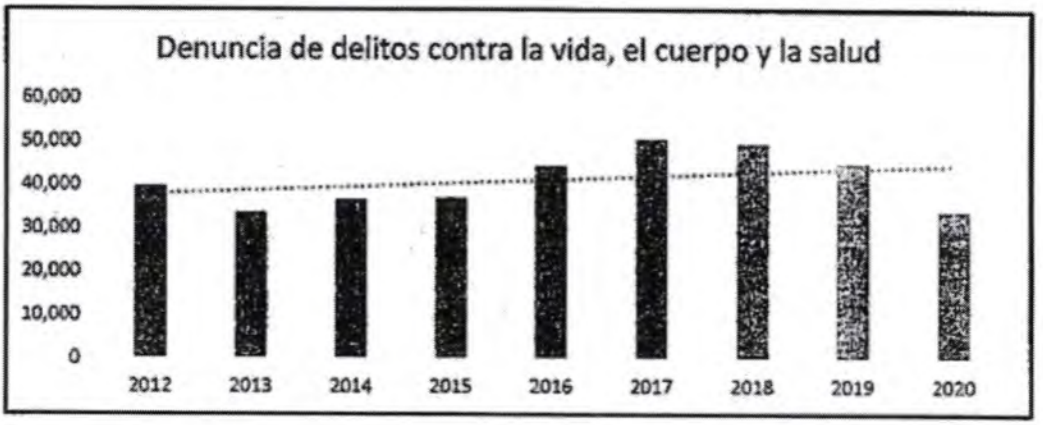


Fuente: INEI-Estadísticas de criminalidad, seguridad ciudadana y violencia
Elaboración propia

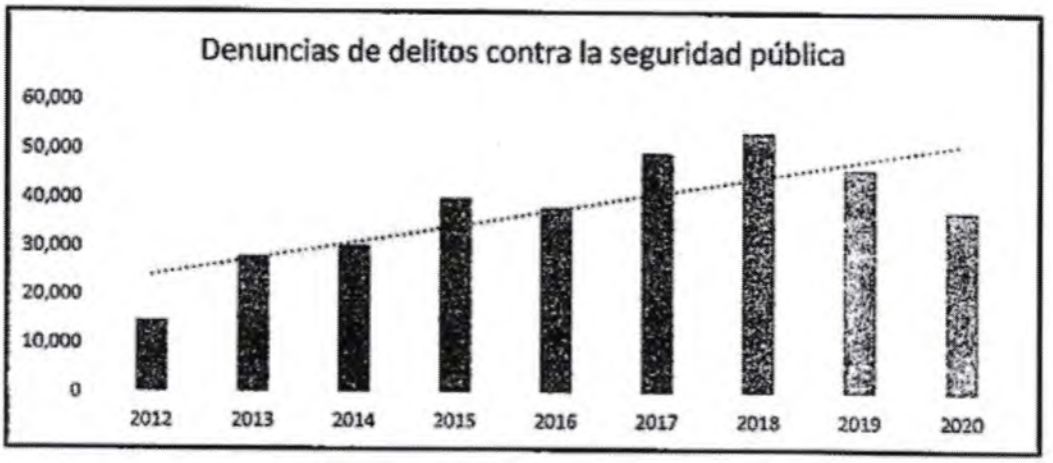
Resalta que, según cifras de la Dirección de Investigación Criminal de la Policia Nacional desde enero a julio del 2021 se cometieron cerca de 7 mil delitos por delincuentes venezolanos y otros 1500 por extranjeros de otras nacionalidades.



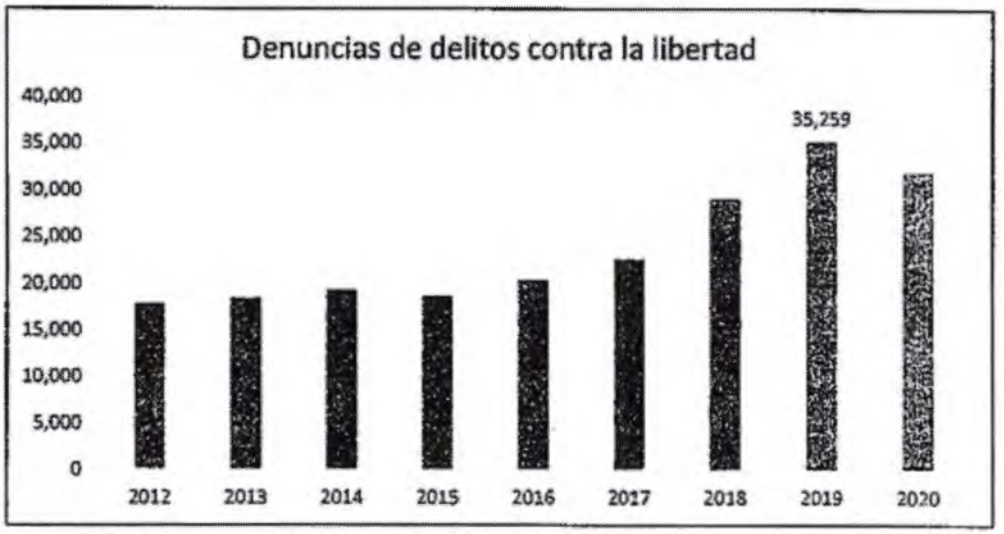
Fuente: INEI-Estadísticas de criminalidad, seguridad ciudadana y violencia
Elaboración propia



Fuente: INEI-Estadísticas de criminalidad, seguridad ciudadana y violencia
Elaboración: Propio



Fuente: INEI-Estadísticas de criminalidad, seguridad ciudadana y violencia
Elaboración: Propio

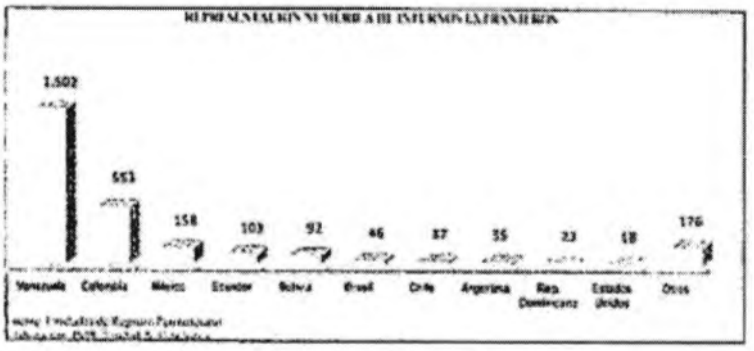


Fuente: INEI-Estadisticas de criminalidad, seguridad ciudadana y violencia

Elaboración: Propio

También señala que, según los medios periodísticos, el costo de mantener un interno en forma mensual representa un costo de S/ 900 a S/ 1000, en términos anuales estaría entre S/ 10,800 y SI 12,000, dicho importe debe coberturar las necesidades de alimentación, seguridad, limpieza, educación entre otros.

Refiere que, en el Informe Estadístico del INPE a noviembre de 2021 se indica que se encuentran en los centros penitenciarios 2,743 internos extranjeros (3% de la población penitenciaria) de los cuales 2,506 son varones y 237 mujeres. Para su mantenimiento le demanda anualmente al Estado Peruano aproximadamente S/ 33 millones. Con relación a los internos extranjeros, los de nacionalidad venezolana alcanzan los 1,502, representando el 55%, seguido por los de nacionalidad colombiana con 553 que es el 20%.



Fuente: Instituto Nacional Penitenciario(INPE)(2020), INPE(2019), INPE(2018), INPE(2017)

Expone que, aproximadamente a partir del 2018 la población penitenciaria de extranjeros se ha ido incrementando hasta alcanzar en la actualidad el 3% de la población total penitenciaria. En cuanto al número de denuncias por actos delictivos entre el 2016 y mayo del 2019, los extranjeros venezolanos participaron en 5,767 oportunidades. Precisión del nuevo estado que genera la propuesta.



Fuente: Instituto Nacional Penitenciario
(INPE)(2020), INPE(2019), INPE(2018), INPE(2017)

Precisa que, nuestra Constitución Política del Perú, en su Artículo 44 establece que: Son deberes primordiales del Estado: Defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

Menciona también que, el artículo 163 de la Carta Magna, señala que: El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.

Así como, al artículo 166° de la precitada norma constitucional, refiere que: La Policia Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y control las fronteras.

De igual manera, mediante la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cuyo objeto es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Asimismo, dicha ley entiende por Seguridad Ciudadana, a la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacifica, la erradicación de la violencia y la utilización pacifica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

A su vez, mediante la Ley N° 30506 el Congreso de la República aprobó que se delegue al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, a fin de dictar normas para mejorar la política migratoria interna y externa, así como la regulación de la seguridad fronteriza.

Por lo que recuerda que, en el marco de la delegación de facultades legislativas, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, la misma que regula el ingreso y salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras, la permanencia y residencia de personas extranjeras en el país y el procedimiento administrativo migratorio, la emisión de documentos de viaje para nacionales y extranjeros, así como los documentos de identidad para extranjeros, siendo la finalidad contribuir a la integración de los migrantes y garantizar los derechos a todas las personas nacionales y extranjeras en el territorio peruano, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Por ello señala que, ante la generación de un mayor Índice de delincuencia en nuestro país, y migración desmesurada en los últimos tiempos, se hace necesario tomar acciones inmediatas para regular las leyes migratorias y poner una mayor atención en las inmigraciones en el norte del país a fin de salvaguardar la vida, la integridad física y patrimonio de todos los peruanos.

Exhorta que, se debe unir todo esfuerzo por mejorar nuestro sistema migratorio, que actualmente está muy golpeado por los argumentos esgrimidos y en ese contexto se debe modificar los siguientes artículos que a continuación detallamos:

Menciona que, el artículo 24 incorpora supuestos para el Registro de Información Migratoria como: G. Registro de extranjeros con indicación de sus documentos de identidad, del domicilio debidamente acreditado dentro del territorio nacional, entre otra información relevante.

En el caso del artículo 32 inciso 1) se ha incorporan casos para la cancelación de la Calidad Migratoria como: F. Por incurrir en delito dentro del territorio nacional, G. Por no acreditar el domicilio de residencia dentro del territorio nacional

Afirma que, estas dos medidas propuestas, están destinada a que la ubicación a través de un domicilio y que la identificación de los migrantes sea de prioridad y tengan un trámite claro y expedito en la normatividad nacional, en vista que el gran número de población en situación irregular necesita ser visualizada y de esta manera darles un amparo que les permita regularizarse y al mismo tiempo proteger ante el peligro de delitos como la trata de personas o el tráfico de personas. En fin, lo que se busca es hacer visible al migrante irregular e incorporarlo dentro del sistema legal.

Señala que, al artículo 45 se han incorporado generalidades del control migratorio como: 45.4. Por motivos de seguridad nacional, salud pública, orden interno, orden público y seguridad ciudadana se debe limitar el ingreso y tránsito de los extranjeros, de conformidad con el principio de proporcionalidad.

Afirma que, la medida planteada permite a la Superintendencia Nacional de Migraciones en su calidad de organismo técnico especializado, establecer mecanismos que permitan fortalecer los controles de ingreso y tránsito de los

extranjeros, por motivos de seguridad ciudadana, así como la limitación de ingreso y tránsito de los extranjeros. De ese modo nuestra propuesta busca articular las medidas preventivas para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.

Con relación al artículo 58 inciso 1) se han incorporado supuestos para la expulsión de los extranjeros como: H. Al obtener la libertad luego de cumplir condena dispuesta por tribunal peruano o como consecuencia de la concesión del goce de beneficios penitenciarios, L. Por contravenir disposiciones sanitarias, J. Por poseer falsos documentos de identidad o suplantación de identidad, K. Por encontrarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización, L. Por haber sido detenido por la Policia Nacional del Perú en delito flagrante, M. Por haber sido cancelada su calidad migratoria, N. Por haber sido condenado por delito doloso o culposo

Finalmente señala que, la importancia de esta propuesta es que se faculta la autorización de la expulsión inmediata en siete supuestos en los cuales existe la certeza de la comisión del delito por parte del ciudadano extranjero, se ha identificado el bien jurídico afectado y se conoce a la víctima, por lo que es posible afirmar que no se vulnerarían los derechos de los extranjeros que incurran en delitos.

Afirma que, la finalidad de estas propuestas no pretende criminalizar a los migrantes ni menos radicalizar ni aumentar las facultades punitivas de las entidades que velan por la seguridad ciudadana ni la política migratoria interna. Se trata de individualizar y sancionar al ciudadano migrante que no cumpla con el ordenamiento jurídico estatal y de fortalecer mucho mejor a estas instituciones en los roles que les corresponden legalmente para tener una mejor y más ordenada convivencia.

Como Incidencia de la norma en el sistema de la legislación nacional establece que, la presente propuesta tiene por objeto establecer los supuestos en los que se deberá proceder con un mejor registro, control, cancelación y expulsión de los extranjeros que hayan incurrido en infracciones, fallas y delitos en territorio peruano, contribuyendo así con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y disminución de la población penitenciaria. Siendo así, se dará un marco legal y otorgará herramientas para seguir procedimientos que permitan regular mejor las incidencias que se den y así combatir la delincuencia y reducir el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios.

El texto legal propuesto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1350 DECRETO LEGISLATIVO DE MIGRACIONES, RESPECTO AL REGISTRO CONTROL, CANCELACIÓN MIGRATORIA Y EXPULSIÓN DE LOS EXTRANJEROS

Articulo 1.-Objeto.

La presente ley tiene por objeto modificar e incorporar normas jurídicas al Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones para fortalecer el control migratorio y la cancelación migratoria y ampliar los alcances de la expulsión inmediata y definitiva de los extranjeros que no cumplan supuestos normativos e incurran en delitos dentro del territorio nacional para garantizar la seguridad ciudadana.

Articulo 2.-Finalidad

La presente ley tiene por finalidad instaurar medidas correctivas para contrarrestar la creciente inseguridad ciudadana.

Articulo 3.- Modificación

Modificase los artículos 24, 32°, 45° y 58° del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, en los términos siguientes:

"Articulo 24.- Registro de Información Migratoria

El Registro de Información Migratoria-RIM, está a cargo de MIGRACIONES y contiene de forma centralizada la siguiente información: a. Información respecto de los ingresos y salidas del territorio nacional de peruanos y extranjeros.

b. Otorgamientos, cancelación y denegatorias de Calidades Migratorias y Permisos por parte de MIGRACIONES.

c. Otorgamientos y denegatorias de Visas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

d. Restricciones e impedimentos de tránsito internacional.

e. Sanciones impuestas conforme al presente Decreto Legislativo.

f. Emisión o cancelación de documentos de viaje.

g. Registro de extranjeros con indicación de sus documentos de identidad, del domicilio debidamente acreditado dentro del territorio nacional, entre otra información relevante.

h. Datos de extranjeros condenados por la comisión de delitos o faltas, así como de los ingresos que registren en establecimientos penitenciarios.

i. Registro de nacionalizaciones.

j. Información biométrica de extranjeros.

k. Otra información que se determine en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.

Articulo 32- Casos de cancelación de la Calidad Migratoria

32.1. MIGRACIONES en el ámbito de su competencia puede disponer la cancelación de la Calidad Migratoria en los siguientes casos:

a. A solicitud de parte.

b. Por fallecimiento o declaratoria judicial de muerte o ausencia.

c. Por nacionalización.

d. Por aplicación de sanción de Salida Obligatoria y Expulsión, luego del procedimiento sancionador correspondiente.

e. Por cambio de Calidad Migratoria.

f. Por incurrir en delito dentro del territorio nacional.

g. Por no acreditar el domicilio de residencia dentro del territorio nacional 32.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede cancelar las Calidades Migratorias otorgadas en el ámbito de su competencia, bajo los supuestos de literales a), b) e) y g) descritos en el numeral 32.1 precedente.

Articulo 45- Generalidades del control migratorio

45.1. Toda persona nacional o extranjera, sea esta pasajero o tripulante, debe ingresar y salir del país a través de los puestos de control migratorio y/o fronterizos habilitados. con su documento de identidad o viaje correspondiente.

45.2. MIGRACIONES habilita puestos de control migratorio y/o fronterizo de tal manera que garantice el registro de toda persona, nacional o extranjera, que ingresa o salga del país

45.4. Por motivos de seguridad nacional, salud pública, orden interno, orden público y seguridad ciudadana se debe limitar el ingreso y tránsito de los extranjeros, de conformidad con el principio de proporcionalidad.

Articulo 58.- Expulsión

58.1. Serán expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos:

a. Realizar trámites migratorios mediante la presentación de documentación falsa o haber proporcionado datos o información falsa.

b. Por reincidencia en cualquiera de los supuestos de salida obligatoria previstos en el artículo 57° del presente Decreto Legislativo.

c. No cumplir con la salida obligatoria impuesta conforme al presente Decreto Legislativo.

d. Por encontrarse en situación migratoria irregular por ingresar al país sin realizar el control migratorio, pese a tener impedimento de ingreso por salida obligatoria vigente.

e. Por atentar contra el patrimonio cultural de la Nación.

f. Realizar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno a la seguridad nacional.

g. Por mandato del Poder Judicial.

h. Al obtener la libertad luego de cumplir condena dispuesta por tribunal peruano o como consecuencia de la concesión del goce de beneficios penitenciarios.

i. Por contravenir disposiciones sanitarias.

j. Por poseer falsos documentos de identidad o suplantación de identidad.

k. Por encontrarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización.

l. Por haber sido detenido por la Policía Nacional del Perú en delito flagrante.

m. Por haber sido cancelada su calidad migratoria.

n. Por haber sido condenado por delito doloso o culposo.

58.2. Para los casos de Asilo y Refugio se aplica la normativa correspondiente."

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

UNICA. Adecuación al Reglamento.

El Poder Ejecutivo, debe adecuar el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones a las disposiciones establecidas en la presente ley. en el plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

III. MARCO NORMATIVO

- ✓ Constitución Política del Perú,

- ✓ Reglamento del Congreso de la República
- ✓ Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.
- ✓ Decreto Supremo N° 007-2007-IN, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias.
- ✓ Decreto Legislativo 1130, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES
- ✓ El Código Penal del Perú (Decreto Legislativo 635).

IV. ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN LEGISLATIVA

a) Análisis técnico

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, después de analizar la iniciativa legislativa y las opiniones recibidas, así como la legislación vigente, ha considerado conveniente proponer la no aprobación y remisión al archivo de la iniciativa legislativa que propone la modificación del Decreto legislativo de Migraciones.

La iniciativa propone la modificación de los artículos 24, 32, 45 y 58 del Decreto Legislativo de Migraciones, referidos al registro de información migratoria, la cancelación de la calidad migratoria, el control migratorio y la expulsión de extranjeros.

La exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa está referida especialmente a la migración venezolana al país, así como su calidad migratoria, la incidencia en actos delictivos, etc.; por ello, la presente iniciativa colisiona con el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Perú, al evidenciar una discriminación por motivo de origen y nacionalidad con los migrantes venezolanos; por lo deviene en inconstitucional la presente iniciativa; estando además penado en el artículo 323 del Código Penal.

No obstante, es importante referirnos a la opinión de la Defensoría del Pueblo, quien, en coincidencia con lo anteriormente señalado, afirma que, la iniciativa *se contrapone a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico vigente; e incumple las obligaciones internacionales en materia de protección de personas en movilidad internacional. Toda vez que, la exposición de motivos del presente proyecto de ley se ampara principalmente en la errónea asociación entre el incremento de actos delictivos y la presencia de refugiados*

y migrantes en el país.

Recuerda además que, el problema de inseguridad ciudadana no es nuevo en nuestro país, ya desde hace varias décadas afecta a la población a nivel nacional. Tal es el caso que, en el año 2003 se aprobó la Ley 27933, Ley del sistema de seguridad ciudadana, cuyo objeto es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional; estableciendo un Consejo nacional y los comités regionales, provinciales y locales.

Con relación a las propuestas contenidas en la iniciativa legislativa, debemos recordar que éstas ya están contenidas en otros artículos de la misma norma de migraciones; por ello, podría considerarse una sobre legislación, que deviene en innecesaria, y afecta a nuestra legislación nacional.

Con relación a los artículos 24 y 32, la obligación propuesta sobre el domicilio acreditado ya está contenido en la norma; por lo que deviene en innecesaria.

En el caso del artículo 45, la propuesta deviene en innecesaria, ya que la seguridad ciudadana es parte del orden interno; implicando una repetición innecesaria.

El artículo 58, sobre expulsión, debemos recordar que los incisos propuestos ya se encuentran regulados de manera general en los supuestos de expulsión o salida obligatoria.

Asimismo, la expulsión de extranjeros por la presunta comisión de delitos dolosos contraviene el principio constitucional de presunción de inocencia; lo que corresponde es el pronunciamiento del Poder Judicial a través de una sentencia firme; por ello, Migraciones no tendría competencia para determinar la culpabilidad de un extranjero.

Además, en la misma exposición de motivos se afirma que: *se han emitido 6,000 resoluciones de expulsión de ciudadanos extranjeros, de los cuales el 98% corresponden a los de nacionalidad venezolana.* Por ello la presente propuesta deviene en innecesaria, ya que su finalidad la viene cumpliendo la Superintendencia de Migraciones desde hace varios años.

Dictamen de no aprobación y remisión al archivo, recaído en el Proyecto de Ley N° 3031/2022-CR, que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, respecto al registro, control, cancelación migratoria y expulsión de extranjeros.

Por las consideraciones expuestas, proponemos el presente dictamen de no aprobación y remisión al archivo de la iniciativa legislativa bajo análisis.

V. CONCLUSIÓN

En atención a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del periodo anual de sesiones 2022-2023, en su Décima Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de febrero de 2023 ha acordado por **UNANIMIDAD** de los presentes, la aprobación del Dictamen de no aprobación y remisión al archivo del Proyecto de Ley N° 3031/2022-CR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIABRA LEON Roberto Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 18:04:50-0500

Salvo parecer distinto,
Dese cuenta.
Sala virtual de la Cor[illegible].

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BAZAN CALDERON Diego Alonso Fernando FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 08:40:28-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AZURIN LOAYZA Alfredo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 09:37:46-0500

Lima, 6 de febrero de 2023

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 15:49:13-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 12:06:56-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CUETO ASERVI Jose Ernesto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 12:37:31-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLIVOS MARTINEZ Leslie Vivian FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/02/2023 14:21:57-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ MORALES Jeny Luz FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/02/2023 15:30:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA ROJAS Carlos Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/02/2023 16:17:31-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 **de** marzo **de** 2023 .

Con acuerdo del Consejo Directivo,
pasó al archivo. —

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dictamen de no aprobación y remisión al archivo, recaído en el Proyecto de Ley N° 3031/2022-CR, que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, respecto al registro, control, cancelación migratoria y expulsión de extranjeros.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/02/2023 17:42:27-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTINEZ TALAVERA Pedro Edwin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/02/2023 11:12:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO FIR 16655831 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/02/2023 20:03:37-0500